San Andrés y Providencia en el siglo XXI y la pandemia del COVID-19

Documentos de Trabajo sobre Economía Regional y Urbana
Número:
296
DOI:
https://doi.org/10.32468/dtseru.296
Publicado:
Martes, 16 Marzo 2021
Authors:
Jaime Bonet-Morón,
Diana Ricciulli-Marin,
Daniela Peña
Clasificación JEL:
R12, R15, R58
Palabras clave:
Covid-19, San Andrés, Desarrollo regional
Descargar documento

Lo más reciente

Settlement liquidity in the Colombian large-value payment system: the role of reserve requirements
Fredy Gamboa-Estrada, Freddy Cepeda-López, Javier Iván Miguélez-Márquez
Geopolitical risk and emerging market sovereign risk premia
Fredy Gamboa-Estrada, José Vicente Romero
Assessing the effects of recent provisioning rules on consumer credit allocation in Colombia
Fredy Gamboa-Estrada, Diego Cuesta, Camilo Sanchez-Quinto
Otras Publicaciones

Enfoque

La pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento ordenadas para prevenir su expansión han sido devastadoras para el turismo. En los primeros cuatro meses del 2020, las llegadas de turistas internacionales en América Latina disminuyeron 35% con respecto al mismo periodo del año anterior (United Nations, 2020), y se estima que esta caída alcanzó entre 60% y 80% en el año 2020, la peor caída desde 1950, año a partir del cual se cuenta con registros de esta información (CEPAL, 2020a).

Esta parálisis casi completa de la actividad turística ha afectado en mayor medida a las economías dependientes de este sector. En Colombia, este es el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, las llegadas de pasajeros nacionales a la isla pasaron de 258.338 a 658 personas entre el primer y segundo trimestre del 2020, mientras que las de pasajeros internacionales se redujeron

desde 12.578 a cero personas en el mismo periodo. De manera similar, y en línea con estas caídas, a lo largo del segundo trimestre del año, la tasa de ocupación hotelera registrada en San Andrés y Providencia fue cero, una caída de 71,1 puntos porcentuales (pp) frente al mismo periodo del año anterior, la reducción más alta registrada en el país.

Contribución

En este contexto, un elemento clave para avanzar en la formulación de políticas públicas que permitan minimizar los impactos económicos y sociales que ha sufrido el archipiélago en el último año, es el conocimiento detallado de la situación actual del territorio: quiénes representan la población más vulnerable, en qué sectores trabajan y en qué condiciones viven. En este sentido, este documento tiene dos objetivos: (i) caracterizar la economía y las condiciones de vida del archipiélago en las primeras décadas del siglo XXI, y (ii) presentar un análisis del impacto económico de la pandemia del COVID-19 en este territorio.

> **Resulta indispensable incrementar la cobertura de servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado y gas natural, aumentar la calidad del empleo en el sector turístico, y reducir los altos índices de criminalidad que enfrenta el territorio.**

Resultados

Los principales resultados de este estudio señalan avances importantes en materia económica en las últimas décadas, así como grandes desafíos que han cobrado mayor importancia en los meses recientes con la llegada de la pandemia. Dentro de los retos se destaca la necesidad de impulsar la competitividad del sector turístico y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del archipiélago. Para ambos aspectos resulta indispensable incrementar la cobertura de servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado y gas natural, aumentar la calidad del empleo en el sector turístico, y reducir los altos índices de criminalidad que enfrenta el territorio. En particular, todas estas problemáticas se han visto agravadas con la llegada de la pandemia y el consecuente desplome de la actividad turística, que ha llevado al quiebre de los tejidos empresariales, el aumento del desempleo y la reducción de los ingresos públicos territoriales. En general, los indicadores presentados señalan la urgencia de una respuesta de política pública coordinada entre los gobiernos nacional y locales y el sector privado isleño, para minimizar las consecuencias económicas y sociales que ha dejado la pandemia en este territorio.